

4/10  
12/59

**PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD LEY DE INEMBARGABILIDAD**

---

**EXCMA. CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Sala I**

**Juicio: “DURÁN DE MOYANO, CLARA IRMA Y OTROS C/  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN s/ CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO “**

**Expediente N° 1140/09**

**CLARA DURAN DE MOYANO**, por la representación de los actores **Roberto Rosario Fagre, Jesús Antonio Alderetes, Hugo Roque Brunetti, Guillermo Rosendo Hernández, Ramón Eduardo Juárez y Clara Irma Durán de Moyano**, por mis propios derechos como actora y jubilada, en autos, a V.E. con respeto digo:

**I. OBJETO**

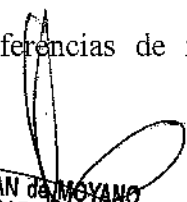
Que en tiempo y forma vengo por este acto platear la **Inconstitucionalidad de la Ley de Inembargabilidad N° 8.851, y su Decreto Reglamentario N° 1583/1 (FE); y en consecuencia de la Ordenanza Municipal N° 4.793/16 que adhiere a tal normativa y del Decreto Municipal N° 4.272 del 07/12/2016. y/o de cualquier otra norma provincial o municipal que impida medidas de ejecución forzada y traba de embargos en contra de la accionada, solicitando se declaren inaplicable por **inconstitucionales e inconvencionales** en el presente caso, comprensivo de **Capital, Intereses y Costas**.**

Con costas.

En base a los fundamentos de hecho y de derecho que expondré seguidamente.

**II. ANTECEDENTES**

Que oportunamente he promovido ejecución de sentencia por diferencias de movilidad en el haber jubilatorio que percibimos, obteniendo

  
CLARA I. DURAN DE MOYANO  
ABOGADO  
MAT. PROF. 1755 - 1º F. Fº 229  
MAT. FED. Tº 93 Fº 891  
CUIT 27-06538192-9 R. INSC.

mediante sentencia (firme y consentida) de fecha 10/04/2019 que resolvió: “I) **NO HACER LUGAR**, ...a los incidentes de impugnaciones de planillas formulados por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ...-II) **APROBAR** ...la liquidación de ...de fs.1.448/1458, con intereses al 31/07/2018, por la coactora Clara Durán de Moyano, por derecho propio.-III) **APROBAR**, ..., la liquidación practicada a fs. 1424/1525, con intereses al 31/08/2018, por los actores Roberto Rosario Fagre, Jesús Antonio Alderetes, Hugo Roque Brunetti, Guillermo Rosendo Hernández y Ramón Eduardo Juárez.—IV)...V)...”

En autos, en representación de los actores representados y de la suscripta la acción fue promovida, persiguiendo se declare el derecho a la movilidad de los haberes jubilatorios devaluados; importes que seguimos percibiendo por importes inferiores a los que por sentencia nos corresponden. Ello a pesar que se obtuvo sentencia favorable y condenatoria — luego de un largo pleito de 11 años, sin computar el proceso administrativo previo— habiendo progresado el pago de las diferencias de haberes retroactivos, actuales y futuros de mis representados.

Que por **sentencia de fecha 22 / 08 / 2019** V.E dictó sentencias de trance y remate (Nº 673, Nº 674, Nº 675, Nº 676, Nº 677 y Nº 678) , las que se encuentran firmes y ejecutoriadas a la fecha, no obstante la accionada no ha cumplido con la condena, lo que pone en palmaria evidencia la actitud reticente por parte del Estado Municipal frente a un tema de suma importancia y sensibilidad social, configurando a la vez una cuestión de **GRAVEDAD INSTITUCIONAL ANTE EL NO PAGO DE DEUDA ALIMENTARIA** cuyo origen es una sentencia firme, que ordena llevar adelante la ejecución por los siguientes importes allí consignados, más intereses y costas hasta su efectivo pago, en cada uno de los actores representados y de la suscripta.

Que pese existir sentencia que manda llevar adelante la ejecución de cada uno de los actores nominados, existiendo además planillas aprobadas por sentencia -firme- de fs.1.448/1458 al 31/07/18 de la suscripta como actora: y de los actores Fagre, Alderetes, Brunetti, Hernández y Juárez a fs.1.464/1525 y tal se sostuvo la demandada no se aviene a dar cumplimiento con las condenas, razón por la cual se hace necesario **recurrir a su ejecución forzada** mediante la traba de embargos sobre los fondos de la demandada.

Que las diferencias por movilidad del haber jubilatorio en el presente juicio datan de DIEZ AÑOS en la vía judicial sin computar los reclamos administrativos previos.

**TENGA PRESENTE EL TRIBUNAL QUE YA EXISTE EN ABUNDANTE JURISPRUDENCIA EN EL TRIBUNAL Y CSJ SOBRE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 8.851 Y EN CONSECUENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 4.793/2016-que adhiere a tal normativa Y DEL DECRETO MUNICIPAL N° 4.272 DEL 07/12/2016.; habiéndose declarado la INAPLICABILIDAD de la ley 8.851 y de su Ordenanza Municipal N° 4.793/2016 para juicio como el presente.**

Y ante la existencia de leyes de emergencia económica que *prima facie* impiden ese tipo de medidas de ejecución forzosa, se hace necesario con carácter previo remover ese valladar, mediante la **declaración de inconstitucionalidad** de las normas de emergencia y su **inaplicabilidad** al presente caso, en razón de vulnerar derechos de raigambre constitucional y suprallegal de mis mandantes conforme se argumentará infra.

### **III. INCONSTITUCIONALIDAD**

#### **i. Oportunidad.**

Se introduce en tiempo oportuno y en la forma adecuada el planteo de **Inconstitucionalidad** de las normas de emergencia económica ante la necesidad de proceder a ejecutar en forma forzosa las sentencias de trance debido a la falta de cumplimiento y desidia de la demandada quien pese estar conminada a cumplir no se digna a pagar deuda a mis mandantes lo que les es debido. Por ende, menos a su abogada., no obstante tener ambos el carácter de DEUDA ALIMENTARIA.

#### **ii. Fundamentos**

En lo sustancial el planteo debe prosperar por entender que la emergencia económica declarada y prorrogada indefinidamente por el Estado a partir del año 1999 y sin solución de continuidad a través de sucesivas leyes, decretos y ordenanzas, violentan los principios de *razonabilidad y temporalidad*

enunciados por la doctrina de la CSJN y CJT lo que conduce derechamente a la *frustración y desconocimiento* en los hechos del derecho mismo de *propiedad e igualdad* de mis conferentes (arts 14, 17, 75 : 22 CN) y a un *trato digno* (arts 51 y cc CCyCN, Pacto de San José de Costa Rica)

### iii. Derechos Constitucionales conculcados

Que tales normas confrontadas con el **derecho de propiedad (art 17) alimentario** que invoca esta parte no superan el *test de constitucionalidad*, siendo inconciliables con la norma suprema frente a la cual necesariamente deben ser declarados inaplicables para el presente caso (art 28 y 31 CN).

Lo contrario conduciría a un quiebre de la **seguridad jurídica** propia de un sistema republicano de gobierno, por lo que debe evitarse que el Estado sostenga el estado de emergencia -por definición excepcional y transitorio- "*sine die*" pasando a ser una normalidad y no una situación de excepción que justificó la toma de medidas para conjurarlo. De lo contrario se convierte al '*derecho adquirido*' en una '*mera e incierta expectativa*' de cobro, mutando su sustancia, lo que excede con creces a su reglamentación

Si bien no desconoce esta parte que la declaración de inconstitucionalidad es un remedio extremo y excepcional al que solo cabe acudir cuando no sea posible alguna otra solución *razonable*, en el presente caso se advierte claramente la existencia de una situación que razonablemente amerita y justifica proceder en el sentido propuesto -inconstitucionalidad- atento que la postergación *sine die* del cobro de un *crédito de ostensible naturaleza alimentaria y provisional* de mis conferentes y que se sustenta en una *sentencia judicial* pasada en autoridad de cosa juzgada., no resiste el menor análisis, siendo por demás evidente la *irrazonabilidad* de esa postergación y con ello su palmaria **inconstitucionalidad e inconvencionalidad** (art 75 : 22 CN).

En tal sentido se ha dicho que la *raigambre alimentaria de los haberes previsionales exige una interpretación favorable a su efectiva percepción*.

Es que, no resulta admisible que el vencedor de un pleito judicial pueda contentarse con un mero reconocimiento de su derecho debiendo arbitrarse los medios para satisfacer -en términos prácticos- la prestación que le es

debida en virtud del reconocimiento jurisdiccional logrado (conf. ALSINA, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Bs. As, 1962, Tomo V, Ediar, pag 111).

No resiste el *test de constitucionalidad* en el caso concreto que nos convoca, una norma que impone que las sentencias dictadas en contra del Estado tendrán meramente *carácter declarativo* no pudiendo procederse a su ejecución judicial compulsiva, con lo que claramente está volviendo en contra del principio precedentemente citado. Menos aún cuando esa postergación se viene prolongando sin solución de continuidad desde hace 12 años !, y que cuentan con ESPECIAL TUTELA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, criterio refrendado por nuestra Corte Suprema de Justicia en el reciente fallo Prieto.

Es decir que el Estado no puede colocarse al margen del orden jurídico al que está obligado a tutelar ni se encuentra exento de dar cumplimiento a los fallos judiciales, mediante el dictado de leyes que sin efectuar mayores distinguos y prorrogadas de modo indefinido conducen inexorablemente a la **frustración de los derechos constitucionales** de la suscripta.

Es claro que las leyes de emergencia vulneran los principios de **temporalidad** y de **razonabilidad** -que enuncian tanto la CSJN como la CSJT- incurriendo en flagrante violación de derechos fundamentales de mis mandantes y afectando su DIGNIDAD MISMA como personas humanas y en la etapa final de sus vidas.

Se afecta de este modo el derecho de PROPIEDAD (art 17) la IGUALDAD art 16 CN, art 1 Pacto de San José de Costa Rica, el DEBIDO PROCESO, la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (art 18 CN, art 8 y 25 Pacto de San José de Costa Rica), el derecho a la TUTELA DEL HABER PREVISIONAL (art 14 CN y Convención Internacional de los Adultos Mayores).

Colocando a mis mandantes a mis mandantes en situación de **desigualdad y desventaja** frente al estado demandado cuando pretende hacer valer sus legítimos derechos a percibir lo que por ley y sentencia judicial firme le corresponde, frete a normas que consagran privilegios a favor del estado incumplidor. Afectando la DIGNIDAD misma de las personas, que en tercera edad

se ven privadas de su HABER JUBILATORIO como único sustento de vida, poniendo en riesgo su propia SUBSISTENCIA.

No cambia la situación descripta la reciente ley de emergencia N° 8851 que implica una adhesión a las Leyes Nacionales de Emergencia e Inembargabilidad 25.973, 24.624, 25.565 y 11.672., ya que los procedimientos allí consignados tampoco son razonables y se hacen pasibles de idénticas críticas. Por el contrario en los hechos implican que el acreedor queda sujeto a una serie de **ponderaciones discrecionales del Estado** para su efectivo pago; quien hasta cuenta con la facultad de disponer el pago con títulos de la deuda y a una tasa de interés irrisoria, o bien de postergar derechamente su pago hasta tanto existan recursos suficientes (conf. art 3 Ley 8851 en concordancia con el art 20 de la Ley 24.624). Todo lo cual luce **irrazonable**.

Adviértase en el sentido mencionado el art. 20 de la ley 24.624 prevé la hipótesis del incumplimiento de la previsión presupuestaria, para decir que : *en el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el P.E.N. deberá efectuar las provisiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, a cuyo fin la Secretaría del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día TREINTA Y UNO (31) de agosto del año correspondiente al envío del proyecto. Los recursos asignados por el CONGRESO NACIONAL se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal.*

Es decir que si bien se establece un mecanismo para atender el pago de las deudas del Estado, el mismo es **excesivamente vago, conjetural, hipotético, previéndose incluso que pueda ocurrir que las partidas asignadas no resulten suficientes** en cuyo caso deberían ser incluidas para el **siguiente ejercicio fiscal y así sucesivamente sin establecer una fecha cierta o límite** para su pago, y consignando que se atenderán siguiendo un estricto orden de antigüedad, criterio que tampoco resulta por sí solo razonable, ya que en su caso, debió derechamente **EXCLUIRSE** de este **excepcional régimen de interpretación restrictiva** y establecerse un régimen diferenciado de satisfacción normal u

ordinaria, para las condenas que involucren CRÉDITOS DE NATURALEZA ALIMENTARIA, los que lógicamente deben atenderse ponderando su carácter especial e impostergable ya que se relacionan con la atendibilidad de necesidades básica, primarias y de subsistencia digna de las personas en SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA atento su avanzada edad siendo SUJETOS DE PREFERENTE TUTELA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Sin que quepa desentenderse de las circunstancias concretas de la causa apuntadas, ni de los hechos de público y notorio conocimiento que dan cuenta a diario del incumplimiento de parte del Estado en el pago de sus deudas, escudándose en un sinfín de normas engorrosas de difícil interpretación, cuando no modificadas a través de reglamentaciones, etc.

### iii. TUTELA PREFERENCIAL DE LOS JUBILADOS. VULNERABLES

Se suma a lo expuesto la ESPECIAL TUTELA CONSTITUCIONAL y CONVENCIONAL con que cuento también como abogada de mis mandantes, personas Jubiladas, Adultos Mayores en situación de VULNERABILIDAD, merecedores de una especial tutela legal y convencional, de la que no estoy excluida, aspecto éste que resulta relevante y en modo alguno puede ser soslayado a la hora de resolver el presente planteo.

En efecto, gozan de tutela Constitucional tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial, como así también en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Argentino, cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad internacional.

Asimismo la recientemente sancionada legislación Civil y Comercial CCyCN hace hincapié en la necesidad de tutelar a las personas en situación de vulnerabilidad consagrando lo que se conoce como la ÉTICA DE LOS VULNERABLES con sustento constitucional en la IGUALDAD REAL, y con especial respeto a la DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, conf. Arts. 1, 2, 51, 52, 280, 1097 y cc. conforme los criterios generales que surgen de los Tratados de Derechos Humanos.

De su lado, la demandada ha guardado absoluto silencio e incumplimiento desidioso y desafiante frente a la condena firme pese al tiempo ya transcurrido desde el dictado de sentencia de fondo, de fecha 05/06/2014, su

aclaratoria de fecha 25/07/2014; Sentencia de Corte de fecha 29/03/2016 (nº315) y Sentencia de Cámara Nº 653 de fecha 30/10/17- **firmes y consentidas**- y que sin que a la fecha haya invocado y menos acreditado haber efectuado una previsión presupuestaria e inclusión del crédito en el presupuesto del Estado para atender su pago, lo que a esta altura, en su caso, sería **EXTEMPORÁNEO**. No obstante, aún para el supuesto que así lo hiciera si se advierte que la Ley prevé la posibilidad o hipótesis de que las partidas afectadas resulten insuficientes, en cuyo supuesto deberá a su vez pasar al siguiente ejercicio tal previsión no garantizaría pago alguno, sino tan solo una posibilidad de pago incierta luego de litigar más de 9 años, con el albur de tener que seguir esperando, agravado ello por la **avanzada edad de los actores, ya ADULTO MAYOR**, con lo que el pago de la deuda y la protección del CREDITO PREVISIONAL Y ALIMENTARIO respectivo se convierten en *'meras expectativas de cumplimiento ilusorio'* quedando los acreedores titulares de un derecho de propiedad de carácter alimentario frente al estado en situación de absoluta *incertidumbre e imprevisibilidad* ante las deudas alimentarias propias que debemos atender en esta particular etapa de la vida en donde ya no contamos con nuestra fuerza de trabajo sino solo con el sostén resultante de los magros haberes jubilatorios.

De lo hasta acá expuesto se advierte que las normas de emergencia económica, además de **extenderse en modo irrazonable a lo largo de 11(ONCE)años**, siendo esta sola situación bastante para su tacha de inconstitucionalidad, por lo demás, no establecen un régimen claro y preciso, limitado en el tiempo respecto al modo en que se abonarán las deudas del Estado, sino que refieren a un trámite conjetural que pareciera quedar librado al sólo **arbitrio y discrecionalidad del deudor y disponibilidad de fondos**.

Es que si bien puede ser atendible que el estado sancione normas de orden público que lo exceptúen de la obligación de pagar en forma 'inmediata' sus deudas, ello a condición de que cuanto menos se establezca un **régimen preciso de pago en un término cierto de tiempo** que permita una mínima *previsibilidad* en el acreedor para a su vez atender sus propias deudas alimentarias. Debiendo igualmente ese régimen **respetar la moneda de pago y adicionar la cantidad de intereses que fuera menester** para mantener el valor íntegro de la condena, la que de lo contrario se diluiría en un contexto inflacionario como el que azota al país desde hace más de 12 años y se ha agravado

considerablemente en los últimos años, no existiendo indicios certeros que tal situación vaya a mejorar certeramente. Peor aún en el actual contexto inflacionario por el que transita el país ante los reiterados procesos devaluatorios de estos últimos dos años. Prácticamente el crédito motivo del reclamo ha quedado reducido drásticamente al 40% del monto de la liquidación aprobada y ejecutada. Con el agravante que la accionada no abona LAS DIFERENCIAS EN EL HABER ACTUAL ACTUALIZADO conforme últimas Actas Acuerdos salariales homologadas del agente activo.

Asimismo que lo razonable sería que derechamente se excluyan de ese régimen general de emergencia a **cierto tipo de créditos**, atendiendo a su especial **naturaleza** como los **CRÉDITOS PREVISIONALES DE NATURALEZA ALIMENTARIA**. Y frente a las múltiples y variadas deudas que debe afrontar el Estado. Y también atendiendo a los de **montos escasos o no significativos** los que deben ser abonados a su vencimiento sin más. Situación que precisamente se da en el presente caso en donde lo que se reclama es el pago de un crédito de **naturaleza alimentaria y de monto no susceptibles de desestabilizar las finanzas del estado demandado**. Por lo que en el caso que nos ocupa la norma cuestionada deviene **IRRAZONABLE**.

Se advierte asimismo que las normas citadas preveen la posibilidad que la asignación presupuestaria *no se efectúe* o bien que la partida presupuestaria afectada resulte *insuficiente*, previendo en ambos supuestos que la deuda deberá ser atendida con los recursos que se asignen en el *siguiente ejercicio* fiscal y así sucesivamente pudiendo extenderse esa situación de incumplimiento *sine die*, lo que dista de ser una *reglamentación razonable del derecho de propiedad y trasluce un proceder inconciliable con la CN arts 14, 17, 19, 75 inc 22*.

Como que también prevé a renglón seguido que en caso de *insuficiencia de los recursos* asignados por el Congreso para atender las condenas en contra del Estado, el remanente deberá ser atendido con los recursos que se asignen en el *siguiente ejercicio fiscal*.

Es decir que tanto la no previsión presupuestaria, como la carencia de recursos suficientes, se 'soluciona' postergando nuevamente el **pago** para el siguiente ejercicio, y así sucesivamente, con lo cual el **no pago puede**

**legítimamente diferirse *sine die***, lo que obviamente dista de la *razonabilidad que necesariamente debe llevar toda norma jurídica (art 28 CN)*.

Y que no se diga que en el supuesto de autos aún no se ha llegado a ese extremo y que recién en tal supuesto cabría la declaración de inconstitucionalidad, ya que no tiene sentido aguardar la ocurrencia de una mora mayor aún a la ya configurada luego de litigar más de 9 años, y/o de un mayor perjuicio para actuar la solución justa del caso. Antes bien, es preciso actuar en la PREVENCIÓN evitando la ocurrencia de mayores daños moratorios, que por lo demás son presumibles, en consonancia con el PARADIGMA PREVENTIVO instalado en el Código Civil y Comercial de la Nación, como también ponderar la ESPECIAL TUTELA DE LAS PERSONAS VULNERABLES.

Se suma a lo ya expuesto que las leyes de emergencia nacionales a las que remite la ley provincial prevén la posibilidad de **PAGO CON TÍTULOS de la deuda pública** con dilatados vencimientos a 16 AÑOS, lo que todo lo cual termina **diluyendo los créditos** tornándose *ilusoria* su percepción. (cfr art 22 Ley 24624). Lo que se agrava aún más en un **contexto INFLACIONARIO de público y notorio conocimiento** y sin control a la fecha, en el que se encuentra vedada la indexación, con lo que, en el mejor de los supuestos se termina cobrando con títulos de la deuda pública un crédito licuado por el transcurso del tiempo. En efecto, conforme el art 6 de la ley 23982 se prevé que los créditos se abonarán con la **tasa de interés de caja de ahorro común del BCRA**, es decir conforme **TASA PASIVA** la que es de público y notorio conocimiento que en el contexto inflacionario imperante desde hace más de 12 años a la fecha en constante y progresivo agravamiento, resulta harto negativa y por ende **CONFISCATORIA**. Existiendo infinidad de artículos doctrinarios y jurisprudenciales que se han pronunciado en ese sentido al punto tal que su uso judicial ha sido ya dejado sin efecto por entender que la tasa así determinada no cumplía con la finalidad de mantener el valor de la condena (Plenario “*Samudio Ladislaa*” de la Cámara Nacional de Apelaciones del año 2009 ; en el orden local in re “*Di Donato*”, “*Olivares*” entre otros). Siendo un motivo más para declarar la Inconstitucionalidad del régimen de emergencia y particularmente de la tasa de interés, en el caso puntual de autos. **ADVIERTA EL TRIBUNAL QUE LA SENTENCIA DE FONDO DEL PRESENTE JUICIO ORDENA EL PAGO CON LA TASA ACTIVA** – muy por debajo de las índices por inflación- , por lo que **URGE el inmediato pago; máxime tratándose de Jubilados todos adultos mayores.**

Siendo en el caso por demás elocuente la **IRRAZONABILIDAD** del mecanismo previsto por la ley para satisfacer, luego de litigar más de 9 años créditos de naturaleza previsional y alimentaria, lo que **acarrea la inconstitucionalidad de las normas involucradas.**

Fácilmente se advierte entonces que esa mera 'espera' a la que parece remitir las normas en realidad conllevan **postergaciones irrazonables** que terminan **confiscando el crédito** ante un Estado en permanente situación de emergencia que se prorroga sucesivamente desde hace más de 17 años, en un contexto de alta inflación, todo lo cual torna al régimen en las circunstancias descriptas en inconstitucional a la luz de las normas constitucionales que amparan el *derecho de propiedad (arts. 14, 17, 75 : 22 CN), la protección del haber previsional (art. 14) y la protección de la familia (art. 14) el debido proceso y la seguridad jurídica (art. 18), la igualdad ante la ley (art. 16)* frente al crédito de naturaleza previsional y alimentaria que se reclama en el caso puntual de autos. Sin que resulte tampoco razonable pretender que el acreedor deba encontrarse en situación de *indigencia o desamparo* para escapar a este perverso y 'permanente régimen' que de excepcional ya nada conserva.

Con lo expuesto y conforme constancias de autos, cabe preguntarse si en el presente caso el régimen normativo cuya tacha de inconstitucionalidad se postula resulta razonable. A las claras la respuesta negativa se impone.

Se tanga presente asimismo que el crédito que se reclama no es una suma cuantiosa que pueda desestabilizar las arcas del estado o que pueda privarle de su calidad alimentaria.

En su caso la aplicación de las normas cuestionadas implicarían una *degradación tal que destruiría la sustancia del derecho reconocido en sentencia judicial.*

De su lado el Estado es presuroso en perseguir el cobro de sus acreencias para con los contribuyentes los que debemos afrontar rigurosamente en tiempo y forma el pago de los tributos so pena de ser pasibles de ejecuciones fiscales que transitan por carriles abreviados o ejecutivos, con muy limitadas posibilidades de defensa y en donde los intereses que se aplican son elevadísimos (compensatorios, moratorios, punitivos, etc.). Siendo entonces esa asimetría injusta, irrazonable y repugnante a los principios y valores en que se sustenta un Estado Constitucional de Derecho y a la **IGUALDAD CONSTITUCIONAL** (art 16, 75 : 22 CN) de la que no escapa el estado.

Y no se tratan lo precedentemente expuesto de consideraciones generales o abstractas, sino de **hechos notorios** que tienen concreta incidencia en la causa y que deben ser ponderados a la hora de pronunciarse para arribar a una solución justa y acorde a derecho.

#### v. Doctrina

En similares términos se ha pronunciado la DOCTRINA. Así se ha dicho que : "No puede dejar de citarse el problema que implica un Estado republicano y democrático que se auto titula de Derecho, que mantiene desde hace 20 años una situación de emergencia económica, lo que implica en la práctica el **pago de sus condenas judiciales a través de métodos que significan por principio un desmedro en los derechos del acreedor** y en el sistema republicano de gobierno. Con respecto a los derechos del acreedor, cabe precisar que han desaparecido ya las opciones de pago en dólares y la realidad ha demostrado que las opciones de pago en efectivo carecen de resultados positivos; por lo que sólo le queda aceptar **el pago en bonos de consolidación de la deuda**. Ello implica que la deuda originaria que debe ser cancelada en moneda de curso legal mediante una novación dispuesta por el Estado se transforme en la percepción de **bonos a largo plazo con un pago de intereses que no compensa tal retraso** y que implica una **confiscación** ; en definitiva, el no recibir aquello que se debe, sino algo en sustitución, justificado por la emergencia. El segundo aspecto que no puede dejarse de resaltar es que la sentencia y su condena respectiva quedan sujetas a través de diversas normas de jerarquía inferior (decretos, resoluciones ministeriales o de organismos descentralizados) al control por parte del Poder Ejecutivo de la decisión firme de una sentencia judicial, sea esta de un Juez de Primera Instancia, de una Cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este vicio procedimental no hace sino **subvertir el orden constitucional y la división de poderes** del sistema republicano de gobierno, en la medida en que es el propio Poder Ejecutivo quien controla al Poder Judicial y decide en definitiva qué es lo que paga y cuándo lo paga. A esto cabe agregar que el trámite del reconocimiento de la deuda y el pago a través de los bonos que se depositan en la caja de valores **no es ni rápido ni eficiente**; con lo cual el acreedor del Estado con sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada debe no sólo admitir el pago en una especie diferente al de la moneda corriente y la disminución correspondiente de su crédito sino que además debe iniciar un **largo y farragoso**

**trámite por ante las oficinas de la deuda pública,** que le exigen prácticamente de nuevo toda la documentación propia de la demanda y su sentencia correspondiente; reservándose el Estado para sí la posibilidad de revisar la orden judicial. En este orden de ideas, el cobro al Estado de sus acreencias reconocidas por sentencia judicial se transforma prácticamente en un nuevo proceso que ya no tiene -por principio- el control judicial, desde que no está previsto ningún tipo de sanción específica para aquel funcionario que se encargue de la deuda pública y no cumpla las órdenes judiciales. Resulta evidente que la emergencia de la que se habla no es tal. Es característica de toda emergencia un tiempo breve como para salvar las dificultades momentáneas; como ejemplo puede tomarse la designación que se hacía en la Roma antigua de un dictador que no podía durar en su cargo más de seis meses o que finalizaba su período cuando el peligro público había desaparecido. Cuando llevamos 20 años de emergencia no podemos ni siquiera en el lenguaje común admitir que nuestra situación es una situación de emergencia, sino que es nuestra forma común de vivir; de allí que si tal es nuestra forma republicana y democrática tenemos dos opciones; o bien admitimos que el Estado seguirá pagando cómo, cuándo y dónde quiera y que las sentencias del Poder Judicial serán meras declaraciones de derechos (en la medida en que esto es lo normal que sucede desde hace más de 20 años); o bien debemos admitir que **ésta no puede ser nunca una situación permanente,** que de ella se debe salir y que el Estado como creador del derecho y responsable del cumplimiento del mismo **no puede seguir creando para sí un derecho excepcional que lo aparta del resto de las personas** jurídicas y de existencia visible y lo transforma en un ente que al vivir siempre en emergencia responde con soluciones que no son las propias de un Estado de Derecho (Gallegos Fedriani, Pablo O., “Ejecución de sentencias contra el Estado Nacional,” en Cassagne, Juan C. (dir.), Tratado de Derecho Procesal Administrativo, v. 2, Buenos Aires, La Ley, 2007; “Ejecución de sentencias contra el Estado Nacional,” Revista de Derecho Procesal, v. 2001-1, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, pp. 183-213; “Ejecución judicial de las sentencias de contenido dinerario contra el Estado de acuerdo a la nueva legislación y conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,” ED, 189: 668; “Ejecución de sentencias contra el Estado Nacional,” JA, 2009-1, 59; “Ejecución judicial de las sentencias dictadas contra el Estado Nacional,” RAP, 274: 9).

Cfr.: Sentencia Manson de Martilotti vs. Municipalidad de S.M. de Tucumán s/Contencioso Administrativo. Expte.nº 26/14; Usandivaras Ana y otros vs. Municipalidad de S.M. de Tucumán s/Contencioso Administrativo.

Expte.Nº 905/08. (ambas con idéntico objeto de demanda: movilidad del haber jubilatorio), todos ex empleados del entonces Banco Municipal de Tucumán, entre otras.

En definitiva, en modo alguno puede sostenerse que la ley de emergencia que se tacha de inconstitucional sea razonable y se encuentra justificada en el contexto señalado precedentemente y en atención a LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE ESTA CAUSA en donde lo que se reclama es nada menos que el pago de sumas adeudadas a mi mandante en concepto de HABERES PREVISIONALES y LUEGO DE LITIGAR MAS DE 12 AÑOS de pleito. Pretender ahora una nueva postergación implicaría la pulverización de su derecho y del Estado de Derecho mismo, ante el no cumplimiento de una sentencia judicial condenatoria.

Sin que pueda dejar de ponderarse en el caso que estamos ante SUJETOS DE PREFERENTE TUTELA LEGAL, CONSTITUCIONAL Y SUPRALEGAL, como los JUBILADOS, todos PERSONAS MAYORES, VULNERABLES, que derechamente deberían ser excluidos de este tipo de régimen de 'excepción' atento la situación particular en que se hallan en esta etapa de su vida, lo que justifica su mayor protección jurídica.

Es que el orden jurídico debe ser entendido como UN SISTEMA COHERENTE Y RAZONABLE, sin que sea dable conceder una serie de derechos y tutela por un lado a modo de meras declamaciones, y por el otro pretender postergar *sine die* esos mismos derechos a través del dictado de normas de excepción que se prorrogan de modo indefinido en el tiempo.

#### vi. Jurisprudencia

En el sentido propuesto por esta parte -**inconstitucionalidad del régimen de emergencia económica**- se ha pronunciado la JURISPRUDENCIA de nuestros Tribunales en todos los fueros.

EN particular, EN ESTA MISMA CÁMARA (Sala III) en el Juicio Principal (905/08), Sentencia 117 del 29/03/2017 y en el Incidente promovido por el *CPN Usandivaras Angel* (905/08- I 1) y en el Juicio Principal recientemente se ha dictado sentencia de fecha acogiendo el planteo de

inconstitucionalidad postulado, con sustento en el **Dictamen Fiscal** y en **precedentes de esta misma Cámara** a los que me remito y doy por reproducidos.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de distintos fueros locales ha dicho que :

“ El art. 1º de la Ley Nº 8228 (B.O. 22/12/2009) declaró la **Emergencia Económica** del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales desde su entrada en vigencia (acaecida el 18/12/2009) hasta el 31/12/2011; y dispuso -a través de la reforma introducida por la Ley Nº 8358- la inembargabilidad de sus fondos hasta idéntica fecha (31/12/2011). Posteriormente, diversas leyes **prorrogaron sistemáticamente** la declaración de inembargabilidad - a las que adhirió la Municipalidad de Alderetes a través de Ordenanza Nº 1.272/11 (B.O. 26/12/2011)- , estando actualmente vigente la Ley Nº 8753 (B.O. 30/12/2014), que la extiende hasta el 31 de diciembre del año en curso. La ley en cuestión -y sus sucesivas prórrogas- participa de los caracteres de las leyes de **emergencia** dictadas en el marco del ejercicio del Poder de Policía que ejerce el Estado. La legislación de esta clase, responde, entre otros supuestos, al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones económicas anómalas o penurias financieras que impiden a los deudores el cumplimiento de sus obligaciones. En esos casos es lícito suspender o limitar el ejercicio del derecho de los acreedores, si con ese arbitrio se impiden consecuencias perjudiciales que, en definitiva y en virtud del principio de solidaridad social, alcanzarían también a los titulares del derecho suspendido o limitado. La legislación de **emergencia** resulta ser así la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que escoja para remediar aquellas situaciones, siempre que los medios arbitrados resulten **razonables** y no respondan a móviles discriminatorios o de persecución contra grupos o individuos (conf. Fallos: 200:450;201:71). (CSJN, Sentencia 15/12/1967, La Ley Online AR/JUR/118/1967). Ahora bien, respecto al ejercicio del mentado Poder de Policía en materia de **emergencia**, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha establecido jurisprudencialmente que su utilización debe ajustarse a los siguientes requisitos: realidad del estado de **emergencia**, declaración legal de tal estado, legitimidad entre los medios y los fines, **transitoriedad** de la normativa y sometimiento de la legislación en su consecuencia a la Constitución Nacional (CSJN in re: Russo vs.

Delle Donne, J.A. 1959-III-475; Peralta vs. Hermida, J.A. 1969-III-966, entre otros en igual sentido). En cuanto a la duración y temporalidad de la **emergencia**, el problema surge cuando la extensión de su aplicación convierte la necesidad transitoria, que es el criterio de racionalidad para el dictado de la legislación de **emergencia**, en **necesidad permanente**, característica de una crisis estructural y que por tanto, torna **ilegítima la normativa** que originalmente se presentaba razonable. Para evitar dicha circunstancia, es precisamente **la seguridad jurídica** lo que **debe preservarse**, evitando que el Estado sostenga la **emergencia sine die** y la convierta en una normalidad, cuando la realidad es que se trata de una situación de excepción que justificó la toma de medidas para conjurarla. En este aspecto el carácter intangible de los pronunciamientos judiciales, es materia que no resulta ajena a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona, de los derechos y de patrimonio (arts. 17 y 18 de la C.N.), pues las decisiones judiciales dictadas en forma regular integran, según reiterada jurisprudencia de nuestra Corte, el **debido proceso** que dicha cláusula asegura a todos los habitantes de la Nación (Fallos 235:171, 272:188 y otros). A dicho fin, la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser **razonable y limitada en el tiempo**; un remedio y no una **mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato**, y está sometida al **control jurisdiccional de constitucionalidad**, toda vez que la **emergencia**, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (cfr. Fallos 243:467; 323:1566). (CCC, esta Sala en anterior integración, Sentencia N° 242 del 30/04/2008). Desde la perspectiva apuntada, no puede sino compartirse la valoración que de las normas legales en cuestión efectúa la A quo, en tanto las sucesivas prórrogas de la **inembargabilidad de los fondos**, configura un **diferimiento irrazonable del pago de las obligaciones a cargo del Estado** y de tal modo se exhiben como **conculcatorias de los derechos y garantías consagradas en las normas constitucionales para tutelar el derecho de propiedad**. Es que "si graves circunstancias de perturbación autorizan el ejercicio del poder de policía del Estado en forma más enérgica de lo que admiten períodos de normalidad y sosiego, la norma de **emergencia** tiene que ser circunstancial y temporaria" (Cfr. CSJN Fallos 136:171; 200:450; 202:456), lo que obviamente no acontece en un plazo tan extenso como el que en el caso se observa (seis años desde el dictado de la primera ley N° 8228). El dictado de una nueva ley prorrogando la **emergencia** que se trata, agrega así un nuevo término a las sucesivas prórrogas, dando visos de permanencia a una normativa que sólo es excepcionalmente

admisible en su temporalidad. DRES.: ACOSTA - BEJAS. — Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán — Sala III — Sentencia N° 372 de fecha 30 / 06 / 15

También la CSJT mediante sentencia N° 546 de fecha 06 / 08 / 13 se ha pronunciado manifestando que:

*“Esta Corte, con motivo del análisis de la normativa de ~~emergencia~~, entendió que -no obstante la constitucionalidad genérica que podría revestir el plexo legal- cuando por las **peculiares circunstancias del caso** (vgr. avanzada edad del acreedor, **naturaleza alimenticia del crédito**, prolongada inacción del Estado, etc.) la aplicación de la normativa no suponía una restricción razonable y limitada en el tiempo, **importaba una verdadera mutación de la sustancia o esencia de derechos adquiridos, en franca vulneración de la garantía de inviolabilidad de la propiedad que reconoce el artículo de la Constitución Nacional, declarando esta Corte Suprema la ~~inconstitucionalidad~~ de tales leyes** (cfr. CSJTuc: 05/3/2001, “Alfaro, Juan Carlos vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro ejecutivo”, Sentencia N° 104; 05/3/2001, “Bunader Valperga, Rodolfo Edgardo vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro ejecutivo”; Sentencia N° 105; 04/12/2002, “Galván, Mario Vicente vs. DIPOS s/ Cobro de australes”, Sentencia N° 1.106; 30/5/2005, “Padilla, Luis vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ Cobro de australes”, Sentencia N° 436; 01/7/2005, “Rodríguez, Eduardo y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro de diferencias de haberes”, Sentencia N° 543; 04/4/2006, “Teseira, Oscar Hugo vs. Instituto Previsión y Seguridad Social de la Provincia s/ ~~Inconstitucionalidad~~”, Sentencia 271; 12/4/2010, “Rodríguez Dora Esther vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Cobro de Pesos”, Sentencia N° 206; 21/5/2012, “García Mauricio Anaeto y otros vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ ~~Inconstitucionalidad~~”, Sentencia N° 361; 19/12/2012, “Sucesión Garzia Enrique vs. Provincia de Tucumán s/ Cobros [Ordinario]”, Sentencia N° 1.155 [bis]; entre otros). Tanto más debe tenerse presente el recién enunciado criterio, si se toma en consideración que, por ejemplo, la Ley n° 6.987 (sancionada el 05/11/1999), declaró el estado de ~~emergencia~~ de la Provincia hasta el 31/12/2001 (luego prorrogado en diversas oportunidades); mientras que la posibilidad de refinanciación dispuesta por Ley n° 7.163 contiene ab initio un extenso plazo de 40 años, que hasta la fecha no ha tenido concreción efectiva. El paralelismo trazado, mutatis mutandi, permite advertir la trascendencia que reviste el **completo examen***

de las particulares circunstancias del caso y el adecuado análisis de razonabilidad en la aplicación de una norma. " DRES.: ESTOFAN – GANDUR – POSSE. ( en el mismo sentido Sentencia Nro. Sent: 361 Fecha Sentencia: 21/05/2012)

" La prórroga continua de la ~~emergencia~~ económico - financiera de la comuna rural ejecutada, la inembargabilidad de sus rentas y la suspensión de la ejecución de sentencias ejecutoriadas en su contra, violentarían los principios de temporalidad y razonabilidad enunciados por la doctrina de las Cortes Supremas de Justicia de la Nación y de la Provincia, provocando la frustración y el desconocimiento del derecho mismo que se pretende hacer efectivo mediante el cobro y por lo tanto, afectando directamente el derecho de propiedad del ejecutante, consagrado en la Constitución Nacional, por lo que debe hacerse lugar a la ~~inconstitucionalidad~~ planteada. " DRES.: COURTADE - FAJRE. - Cámara Civil en Documentos y Locaciones Sala I – Sentencia N° 44 de fecha 29 / 02 / 16

" No lucia razonable sostener la constitucionalidad de la ley n° 8228 y sus prórrogas y de la Ordenanza n° 1654 de la Municipalidad de Concepción, cuando se ha prescindido de acreditar en autos el perfeccionamiento de los mecanismos que la misma ley acordaba para paliar la situación de ~~emergencia~~ - la confección de un registro de acreedores y la necesidad de elaborar una propuesta para afrontar las deudas (art. 4) -; las omisiones del Estado dejaron sin fundamento a las prórrogas a la ley, puesto que no resulta aceptable que se prorrogue sucesivamente la inembargabilidad e inejecutabilidad de los recursos públicos sin, al mismo tiempo, instrumentar y completar en la realidad de los hechos el procedimiento establecido en la misma ley de ~~emergencia~~ tendiente a dar adecuada satisfacción a los créditos afectados por la ~~emergencia~~ - DRAS.: IBÁÑEZ DE CORDOBA - BRAVO. Cámara Civil y Comercial Común de Concepción – Sentencia N° 184 de fecha 09/ 10 / 2015

" En la Provincia la ~~emergencia~~ económica y la inembargabilidad de las finanzas públicas tiene vigencia no interrumpida desde hace 16 años, si se tiene en cuenta que actualmente se encuentra vigente la ley 8.753 (B.O. 30/12/2014) que las amplía hasta el 31/12/2015. En este contexto, con la sanción de las mencionadas leyes y sucesivas prórrogas dispuestas, que llevan la ~~emergencia~~ y sus efectos hasta el 31 de diciembre del año 2015, se están vulnerando los principios de la razonabilidad y de la extensión temporal de la

moratoria establecida en favor del Estado provincial. Ello es así en tanto la ~~emergencia~~ y la inembargabilidad de los recursos, aún fijadas por un plazo anual, **deja de ser razonable** tanto desde el aspecto temporal como de los derechos amparados por la Constitución Nacional, cuando ese plazo anual **se prorroga en forma continua y sucesiva**, transformando así la situación de ~~emergencia~~ declarada por ley -formalmente considerada anormal y transitoria- en normal y permanente. Ahora bien, en el sub examine se está en presencia de un crédito por honorarios no consolidado, sin que de las constancias obrantes en la causa se desprenda que la demandada haya satisfecho a la fecha el crédito adeudado, o que fuera hacerlo en lo inmediato, de conformidad a las previsiones de la ley 8.228, no obstante haber transcurrido ya prácticamente dos años desde la fecha del dictado del auto regulatorio (sin que oportunamente los honorarios firmes hayan sido pagados como manda la ley 5.480). En tales condiciones, no resulta dudoso que la aplicación en la especie de las normas legales precitadas, que vedan el embargo de los recursos del Estado, se traducirían en una **frustración y desconocimiento del derecho de los letrados ejecutantes**, puesto que las renovadas y reiteradas restricciones en la materia implica de hecho la **postergación sin términos del pago de los créditos** cuyo deudor es el Estado provincial...los estipendios regulados a los profesionales ejecutantes por sentencia firme quedan incorporados a su patrimonio, por lo que la aplicación en el caso que nos ocupa de las citadas leyes de ~~emergencia~~, implicaría también la vulneración del derecho adquirido y garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Si bien es cierto que las garantías y derechos consagrados en la Constitución se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, no es menos cierto, también, que estas leyes no pueden servir de argumento para recortar tales derechos en forma permanente. Así lo ha entendido la **Corte Suprema de Justicia de la Provincia** al expresar: "...Si bien la particular situación de ~~emergencia~~ económica ha provocado el desarrollo de los cauces legales y los fundamentos jurídicos para imponer un límite a los derechos individuales, una excepción a las reglas de fondo que regulan las obligaciones, es cierto que el Estado deudor no puede invocando una y otra vez el mismo argumento, prolongarlo indefinidamente, **postergando irrazonablemente el cumplimiento de obligaciones** que emanan de derechos adquiridos, atentando así contra la más elemental seguridad jurídica y terminar decidiendo por sí mismo cuándo y cómo pagar" (CSJT., Sent. 104 del 05/03/2001, "Alfaro Juan Carlos vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro ejecutivo"). En el

*particular caso de autos, admitir una conducta así de parte del Estado resultaría contrario a los derechos reconocidos y a las garantías establecidas en los artículos 14 bis, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional, convirtiendo, por efecto de la inembargabilidad de sus rentas, el derecho adquirido de los letrados B. en una incierta expectativa de cobro, cuando éstos habiendo transitado el camino que la ley prevé, son impedidos de acudir a las normas procesales vigentes para efectivizar el monto de sus honorarios profesionales, determinado por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.* "DRES.: AGUILAR DE LARRY - SANTANA ALVARADO: - Cámara Civil en Documentos y Locaciones de Concepción - Sentencia N° 32 de fecha 27 / 03 / 15

En el mismo sentido se ha pronunciado la Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala 3 - Sentencia N° 333 de fecha 25 / 09 / 14 ; también la Sala II, conforme sentencia N° 90 de fecha 08 / 04 / 13 :

*"El dictado de la ley 8228 declarando una nueva **emergencia** y que se agrega así a las sucesivas prórrogas de la misma, da visos de permanencia a la ley que sólo es admisible por su temporalidad. Se dejó sentado que tal como lo expresara la Corte Suprema de Justicia local: "... El Estado deudor no puede, en casos como el presente, invocando una y otra vez el mismo argumento, prolongarlo indefinidamente, postergando irrazonablemente el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos adquiridos, atentando así contra la más elemental seguridad jurídica y terminar diciendo por sí mismo cuando y como pagar..." (Cf.: C.S.J.T., "Bunader Valperga, Rodolfo E. vs. Gob. de la Provincia de Tucumán s/ Cobro Ejecutivo", sent. n°105 del 05/03/01). A lo que agregó que la norma vulneraba la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) y (art.27 de la Constitución Provincial), igualdad ante la Ley (art.16 de la C.N). Creando situaciones irritantes, que privilegiaba una de las partes sustrayendo de la acción de los acreedores, bienes y recursos constitutivos del patrimonio, y que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones. Es precisamente el valor "seguridad jurídica" el que debe preservarse, evitando que el Estado sostenga la **emergencia** "sine die" pasando a ser una normalidad y no una situación de excepción que justificó la toma de medidas para conjurarla. En este aspecto el carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes - y con la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial - no resulta tampoco ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art.18 C.N.), pues la sentencia dictada en forma regular integra, según reiterada jurisprudencia*

de nuestra Corte, el debido proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes de la Nación (Fallos 235:171, I, 272:177 y otros), (cfr. sentencia n°505/03 in re Rodriguez Eduardo y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia s/ Cobro de diferencias salariales) y sent. n°932 del 26/11/06. Tales conceptos se inscriben en una larga corriente jurisprudencial -nacional y provincial -, que entiende que las sucesivas prórrogas de la normativa de ~~emergencia~~ que postergan indefinidamente la ejecutabilidad y embargabilidad de los recursos del Estado provincial, **e implican la frustración y el desconocimiento de los derechos de propiedad y de garantía del debido proceso que se encuentran en cabeza del acreedor, no cumplen con los recaudos exigidos por nuestra Corte Suprema Federal para un regular ejercicio del poder de policía de ~~emergencia~~.** DRES.: MANCA - ALONSO.

Existiendo además expresos y recientes pronunciamientos de este mismo Tribunal por la procedencia de inconstitucionalidad é inaplicabilidad en otros juicios promovidos contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán : Sentencias 117/2017, 119/2017 y 208/2017, que en honor a la brevedad y sin menoscabar la suficiencia y elocuencia de los mismos, me remito y solicito aplicación de igual criterio y doctrina fijada con contundencia en los mismos.

### III. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

En el caso que nos ocupa, no solo cabe efectuar un control de constitucionalidad sino asimismo proceder a realizar un **CONTROL DE CONVENCIONALIDAD** a la luz de los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional, conforme art 75 : 22, por encontrarse implicados en el caso Derechos Humanos por tratarse de Honorarios que revisten el carácter de alimentario ( conf. CSJT, sentencia N° 361 del 21/05/2012) por ende de impostergable cumplimiento atento mi edad, extensión de la labor profesional por más de 12 años en la atención del juicio y vulnerabilidad que no admiten postergación mayor aún a la ya sufrida.

Es que la labor de los jueces no se reduce a una mera tarea de subsunción, sino que a partir de la reforma constitucional del año 1994 necesariamente deben efectuar una **PONDERACIÓN RAZONABLE CON PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL**, lo que ha venido a reafirmarse con la sanción del Código Civil y Comercial de la nación, conforme

arts. 1, 2, 3 y cc. que impone a los jueces resolver los casos en que intervengan a través de una **decisión razonablemente fundada** y teniendo en consideración el **sistema de fuentes complejo** del ordenamiento jurídico, interpretando las normas a la luz de los principios y valores sustentados en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos:

Son los derechos de propiedad, de igualdad, la **TUTELA PREFERENTE DE LOS ADULTOS MAYORES**, la protección de la familia, el debido Proceso, la Tutela Judicial efectiva, los que se encuentran comprometidos, amparados expresamente por las Convenciones Internacionales que el Estado Nacional ha suscripto y de los cuales no puede desentenderse so pena de incurrir en Responsabilidad Internacional, conforme lo tiene dicho la Doctrina de la Corte Interamericana de derechos Humanos, cabiendo citar en tal sentido las normas contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, entre otros, y que devienen de operativa e imperativa aplicación por los Magistrados, pudiendo su inobservancia hasta acarrear la responsabilidad internacional del Estado (cfr. Precedentes "*Almonacid Arellano*", "*Radilla Pacheco*", "*Artavia Murillo*", de la CIDH, entre muchos otros).

También la **CSJN** se ha pronunciado respecto al necesario control de convencionalidad que corresponde efectuar a los jueces, no solo a pedido de parte sino aún y también de oficio, en precedentes "*Videla*" y "*Simón*" entre muchos otros.

Es que la reforma de la Constitución Nacional, través del art.75, inc.22, le otorgó jerarquía constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce el principio a la **tutela judicial efectiva** y no puede existir tutela judicial efectiva sin el cumplimiento de las sentencias firmes de los jueces. Tal fue el criterio sustentado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social al pronunciarse en los autos "*Salud, Yamil c/Anses*" de fecha 27-02-02 (sent. unt. 53034), donde sostuvo que "la inembargabilidad que la ley 23.982 concede al Estado no es un beneficio incondicional e irrestricto. Antes bien, se supedita a que éste cumpla y acate las mandas judiciales de un modo determinado, que no perjudique su actividad, pero que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. El Estado, gestor y protector de la sociedad y los individuos que la componen, debe ser el primero en honrar sus

deudas. Entender lo contrario es absolutamente impensable en un estado de derecho". Citar: elDial.com - AA8A22 .

Y es por demás evidente que la norma cuestionada no supera ese control de convencionalidad. Siendo no solo una facultad sino un DEBER de los jueces al administrar justicia proceder a efectuar el mentado control y abstenerse de aplicar una norma de orden local cuando la misma resulta inconciliable con la norma internacional de orden jerárquico superior, mediante lo que se conoce como el CONTROL REPRESIVO DE CONVENCIONALIDAD (Sagües Néstor *'El Control de Convencionalidad'*).

Como que, habiendo quedado en claro que el Estado debe obrar con la debida **'diligencia'** y **buena fe** (arts. 9 y cc CCCN), con la notificación de la sentencia de condena debió haber efectuado la previsión presupuestaria pertinente para su atendibilidad y pago oportuno. Ese es el obrar correspondiente a una persona **diligente y previsor**a como se espera que actúe el Estado.

Es por lo expuesto que lejos de una aplicación de buena fe del régimen de consolidación de deudas, el accionar de la contraria configura una clara muestra de la **desidia del Estado demandado** que **lejos de cumplir con el pago en tiempo y forma ha obligado a iniciar un largo juicio para obtener el reconocimiento del derecho que nos corresponde y de evidente procedencia con el daño que ello implica en la particular circunstancia de los actores, personas mayores, jubiladas que dependen absolutamente del magro haber jubilatorio que perciben, devaluado en un contexto inflacionario de público y notorio conocimiento.**

En el otro extremo, el **Gobierno Nacional** ha adoptado una medida y legislación razonable y coherente para regularizar la deuda que mantiene con los jubilados postergados desde hace años, implementando un sistema de pago expedito y ágil en dinero efectivo. **INCLUSO PARA LAS PERSONAS QUE NO INICIARON JUICIO**, siendo esa la postura razonable y acorde con la tutela legal de preferencia que el orden jurídico acuerda a esta franja etárea en razón precisamente de su MAYOR VULNERABILIDAD que no se condice con el DESTRATO y POSTERGACIÓN de que somos víctimas en el ámbito local municipal.

#### **IV. DERECHO**

Fundo el derecho que me asiste en :

- o Arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 75 inc y 23 de la Constitución Nacional
- o Arts 5, 24, 40 inc 6 e inc 9, 67 inc 6 y cc de la Constitución Provincial
- o Arts. 34 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
- o Arts 5, 87, 88 y cc. Código Procesal Constitucional de la Provincia
- o Arts 1, 2, 8, 11, 21, 24, 25, 26 y cc Pacto de San José de Costa Rica.
- o **Convención Internacional de protección de los Adultos Mayores**

#### **III. PETITORIO**

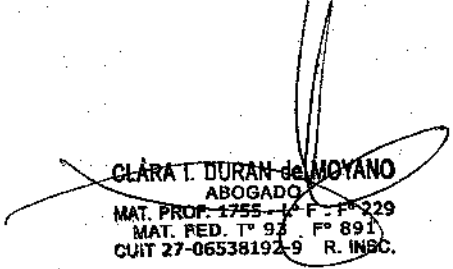
Es por lo antes expuesto que a V.E. solicito:

Tenga por presentada la presente petición de declaración de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad é Inembargabilidad de la normativa de emergencia económica referenciada ut supra y declare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad en el presente caso.

CON COSTAS.-

**Dígnese V.E. proveer de conformidad.**

**SERA JUSTICIA**

  
CLARA I. DURÁN de MOYANO  
ABOGADO  
MAT. PROP. 1755 - 14 F. F° 229  
MAT. PED. T° 93 F° 891  
CUIT 27-06538192-9 R. INSC.